



Proceso	Recurso revisión
recurrente	Erika María Pino Cano
contra	Providencia del 21 de agosto de 2018, proferida por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín
Radicado	050001 22 03 000 2022 00535 00
Instancia	Primera
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Interlocutorio	Nro. 069
Decisión	Rechaza de plano recurso de revisión
Tema	Improcedencia frente a autos
Tema	<i>“..No pueden ser materia del recurso extraordinario de revisión decisiones judiciales diferentes a las sentencias, como los llamados autos de sustanciación, las resoluciones interlocutorias, ni tampoco pueden serlo los autos de este último linaje con fuerza de sentencia, pues el criterio extraordinario, singular y restringido del recurso que se viene comentando impide una interpretación que permita extenderlo a resoluciones que formalmente no son sentencias sino proveídos de menor jerarquía, como los autos”, porque “si se hubiera querido establecer el recurso de revisión para atacar otro género de decisiones judiciales distinto de sentencias, lo hubiera expresado así el legislador. Empero, no lo dijo y tampoco puede desprenderse del articulado que tiene que ver con el mencionado medio de impugnación el cual reitera que procede únicamente contra ‘sentencias ejecutoriadas</i>

TRIBUNAL SUPERIOR

2022-073

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Correspondió por reparto conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderado judicial por Erika María

Pino Cano, en contra de la providencia del 18 de agosto de 2018, proferida por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la Cooperativa CSan Pio X de Granada Ltda. -Coogranada-, en su contra y de Esneider Alonso Gómez Arenas y Lorena Isabel Cañas Naranjo.

I. ANTECEDENTES

a) Con fundamento en la causal séptima del artículo 356 del Código General del Proceso, la recurrente presenta recurso de revisión en contra de la sentencia (auto que dispuso continuar con la ejecución) el 18 de agosto de 2018 dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el número 05001-31-03-017-2017- 00215, seguido entre las partes ya anunciadas.

b) Refiere la recurrente que, para el conteo del término, acreditado en las pruebas allegadas-correo del Juzgado 17 Civil del Circuito de Medellín, como momento en que la actora tuvo por primera vez conocimiento del proceso el día 14 de septiembre de 2020, fecha a partir de la cual la oportunidad legal referida fenece el día 14 de septiembre de 2022, indicando que nunca antes de aquella fecha la recurrente conoció, ni sospechó la existencia de un proceso ejecutivo en su contra, y menos había tenido conocimiento, hasta ese día con el link de acceso al expediente, de la sentencia por la que fue embargada su cuenta de nómina.

c) fundamenta la demanda así:

“...3.1. Del momento de conocer el proceso

3.2. Del expediente judicial al día en que conocimos del proceso - 14 de sept 2020

3.3. De la configuración de la causal 7 artículo 355 CGP - la indebida notificación.

3.3.1 de la simulación de notificación personal a dirección de residencia que sabía la cooperativa ejecutante no era la dirección Erika María Pino Cano desde el año 2016.

3.3.2 del no empleo de la dirección laboral suministrada a Coogranada por la recurrente desde 2015 y puesta en conocimiento en el proceso por parte de Coomeva EPS el día 8 de junio de 2017.

3.3.3 del permanente contacto desde el 2015 hasta la fecha de Coogranada al email y celular de la codemandada Erika María Pino Cano sin jamás enterarla de ningún cobro, mora, ni proceso judicial

3.4. De la nula defensa técnica por la curadora – emplazamiento y designación de curaduría que no constituían lo legalmente procedente

3.5. De las intervenciones de la recurrente ante la administración de justicia una vez conoció la existencia del proceso

3.6. Del ocultamiento al juez de la dirección laboral -procuraduría general de la nación- de la codemandada Erika María Pino Cano. Y pleno conocimiento que tenía la cooperativa ejecutante -antes de la radicación de la demanda en 2017- que dicha codemandada no residía en la dirección que simuló Coogranada notificarla en la ciudad de Medellín.

3.7. De las pruebas sobrevinientes obtenidas por respuesta a derecho de petición dadas por Coogranada y puestas en conocimiento de manera inmediata ante el A quo y el T.S.M. Mg. Ricardo Carvajal, el 18 de mayo de 2021.

3.8. De las excepciones que no se le permitió a la recurrente proponer y por las cuales Coogranada mantuvo en total desconocimiento del proceso a la Sra. Erika María Pino Cano.

3.8.1. De la verdadera relación crediticia avalada por la recurrente

3.8.2. Del pago total de la deuda 3.8.3. De la inexistencia e invalidez del título ejecutivo complejo -pagaré en blanco sin firma de carta de instrucciones por parte de la recurrente.

3.9. De las afectaciones materiales e inmateriales generadas a la recurrente, ante la falta de subsanación del proceso ejecutivo viciado de la causal 8ª del art. 133 C.G.P.

3.9.1. De la decisión judicial ejecutoriada. efectivizada contra Erika María Pino Cano

3.9.2. De la acreditación de descuentos por nomina efectuados hasta el mes de abril 2022 por su empleadora PGN

3.9.3. Del acuerdo logrado con Coogranada – el cual se aceptó a fin de levantar la medida cautelar que viene afectando a mi representada.

3.9.4. Del recurso interpuesto por la apoderada de Coogranada ante el Juzgado Cuarto de Ejecución Civil del Circuito de Medellín. Para que cese el embargo con que continúa afectado el salario de la codemandada Erika María Pino Cano.

3.9.5. Del dictamen por psicología de los padecimientos de la recurrente desde el sometimiento a la situación de embargo originado en el vicio procesal de indebida notificación personal respecto a mi representada, que no ha sido subsanado hasta la fecha...”

II. CONSIDERACIONES

1. El artículo 354 del Código General del Proceso señala que el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas. En sentencia SC788-2018 del 22 de marzo de año 2018 la rectora de la jurisdicción ordinaria expresó:

“1. El recurso de revisión tiene por propósito impugnar de manera excepcional aquellas sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada y que el censor considera contrarias al ordenamiento, para reabrir el litigio original con todas las garantías que inicialmente se le negaron y restablecerle el derecho desconocido, dependiendo su prosperidad de que demuestre que se configura alguna de las precisas causales señaladas en la legislación procesal civil.

“En tal sentido, este remedio extraordinario constituye un límite al principio de la cosa juzgada en aras de la primacía del derecho material frente al formal, es decir, que privilegia la justicia sobre la seguridad jurídica.

“Sobre el particular, la Corte ha sostenido que:

(...) aparece consagrado por el derecho positivo como remedio que se endereza a quebrantar la fuerza de la cosa juzgada, el recurso de

revisión, cuya finalidad es pues invalidar por injusta una sentencia firme, para que por consiguiente la jurisdicción pueda considerar nuevamente el litigio planteado en proceso anterior y fallarlo con arreglo a derecho (G.J. t. CXLVIII, 1ª parte, pág. 14).

2. Luego, cuando el artículo 355 regula las causales hace referencia a la **sentencia** que se ha proferido en el proceso respectivo y artículo 356 ibídem, dispone: *“El recurso podrá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva **sentencia** cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del artículo precedente. Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado artículo, los dos (2) años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la **sentencia** o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco (5) años. No obstante, cuando la **sentencia** debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción”*. Frente a los requisitos formales el numeral 3º del artículo 357, exige la designación del proceso en que se dictó la **sentencia**.

Cabe recordar que el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, fue reformado por la ley 1395 de 2010, y en lo pertinente expresó que si una vez notificado el mandamiento de pago, *“...no se propusieren excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado”*, lo

que se conservó en el artículo 440 del Código general del proceso.

3. El artículo 358 que regula el trámite de esta impugnación delantidamente señala que ***“La Corte o el tribunal que reciba la demanda examinará si reúne los requisitos exigidos en los dos artículos precedentes, y si los encuentra cumplidos solicitará el expediente a la oficina en que se halle”***.

3. En asunto de similares contornos al que ahora ocupa la atención de esta Sala, dijo la Corte Suprema de Justicia:

“3. En el caso concreto, la Sala carece de atribución funcional para resolver el recurso por estar dirigido contra autos y no contra sentencias, como lo dispone el artículo 354 del Código General del Proceso «Procedencia. El recurso de extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas».

3.1. Tal norma, deja expresamente señalado que, únicamente son susceptibles de ser debatidas por intermedio del recurso extraordinario de revisión, las providencias que tengan las características de sentencias y que se encuentren debidamente ejecutoriadas, excluyendo, por tanto, los demás proveídos que no posean esa naturaleza. Al respecto la Sala ha indicado:

(...) no pueden ser materia del recurso extraordinario de revisión decisiones judiciales diferentes a las sentencias, como los llamados autos de sustanciación, las resoluciones interlocutorias, ni tampoco pueden serlo los autos de este último linaje con fuerza de sentencia, pues el criterio extraordinario, singular y restringido del recurso que se viene comentando impide una interpretación que permita extenderlo a resoluciones que formalmente no son sentencias sino proveídos de menor jerarquía, como los autos”, porque “si se hubiera querido establecer el recurso de revisión para atacar otro género de decisiones judiciales distinto de sentencias, lo hubiera expresado así el legislador. Empero, no lo dijo y tampoco puede desprenderse del articulado que tiene que ver con el mencionado medio de impugnación el cual reitera que procede únicamente contra ‘sentencias ejecutoriadas. (CSJ AC 204 de 22 de junio de 1994, CCXXVIII, volumen II, 1499; reiterado en CSJ AC6213-2014 y AC2036-2020 de ago. 31, Exp. 2020-00854-00).

3.2. El anterior argumento es compartido por la Corte Constitucional al conceptualizar sobre la procedencia del recurso de revisión:

RECURSO DE REVISION-Procede contra sentencias ejecutoriadas y no contra autos de sustanciación.

*El recurso de revisión **procede en contra de las sentencias ejecutoriadas y no de autos de sustanciación, así éstos den lugar a la terminación de los procesos** y si bien la actora puede promover un proceso Ordinario, para que se declare la nulidad del Contrato de Transacción, con ello no conseguiría suspender sus efectos, amén de que requiere promover dicho proceso en condiciones de igualdad. (C.C T-873/08).*

3.3. Memórese que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de obligatorio cumplimiento, como lo preceptúa el artículo 13 del Código General del Proceso, aunado que el precepto 230 constitucional somete a los administradores de justicia al imperio de las fuentes jurídicas. Esto se traduce en que los falladores deben abstenerse de emitir pronunciamiento en los asuntos donde carecen de competencia...”¹

4. En conclusión, como no se interpone recurso extraordinario de revisión contra una sentencia ejecutoriada, la impugnación es improcedente, razón por la que se rechazará de plano la demanda.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión,**

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR de plano la demanda presentada mediante apoderado judicial por Erika María Pino Cano, en contra de la providencia del 18 de agosto de 2018, proferida por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la Cooperativa San Pío X de Granada Ltda. -Coogranada-, en contra de la hoy recurrente y de Esneider Alonso Gómez Arenas y Lorena Isabel Cañas Naranjo.

¹ AC4539 de 2021

SEGUNDO. Devolver los anexos a la parte demandante, sin necesidad de desglose.

TERCERO. Reconocer personería para actuar en los términos del poder conferido al abogado Javier Enrique Muñoz Valdivieso, para representar a la recurrente

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 1172a224be1d9385e74f76bef41e93ed1252dac13022010911124cb8a65c1f3d
Documento generado en 22/09/2022 02:22:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>